

La consulta plantea la conformidad con la normativa de protección de datos personales de los términos y condiciones de contratación del servicio de comunicaciones “M2M Movistar”, comercializado por la operadora consultante, y prestado a través de comunicaciones máquina a máquina — bien iniciados de manera automática, o bien realizados mediante intervención humana—, con fines de telemando, telemedida, telecontrol, alarmas u otros de naturaleza similar. Según se expone, el servicio contratado se proporcionará en el marco de los servicios ofrecidos tanto por la consultante, como por cualquiera de las empresas de su Grupo.

A tal efecto, dichas condiciones contienen *una cláusula particular de protección de datos*, señalando que el *contenido íntegro* de la misma se puede consultar en el enlace www.movistar.es/privacidad, o bien solicitar un ejemplar por teléfono o en las tiendas de la propia compañía.

El documento sometido a informe hace especial hincapié en las *medidas de tipo técnico y/o jurídico* que —por parte de la operadora— se adoptarán en el supuesto de incumplimiento, o uso ilícito o indebido del servicio por parte del cliente, con especial mención de la exoneración de responsabilidad de la consultante en caso de concurrir alguno de los supuestos que detalladamente se describen, y que podrían dar lugar a la interrupción definitiva del servicio.

I

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -**LOPDGDD**-, conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamientos de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

El citado RGPD introduce profundas modificaciones en las normas de protección de datos que afectan de forma relevante, entre otras cuestiones, al denominado principio de transparencia y derecho de información de los afectados.

Así, en primer lugar, el artículo 12.1 del RGPD establece que la información a facilitar al interesado deberá serlo “en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo”.

Por su parte, el artículo 13 en sus dos primeros apartados especifica el contenido de la citada información en los supuestos en que los datos sean recabados del afectado al que los mismos se refiere. Dicha información deberá incorporar:

- la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
- los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
- los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
- cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
- los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
- en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.
- el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
- la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
- cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
- el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

- si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;
- la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

En similar sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo **11 de la LOPDGDD**:

“Artículo 11 LOPDGDD. Transparencia e información al afectado.

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el **artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679** facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concorra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.”

Por otro lado, la **nueva Ley 11/2022**, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones —**LGT**— (BOE de 29 de junio), regula de forma integral

el régimen de las telecomunicaciones, al amparo de la competencia exclusiva estatal del artículo 149.1.21ª de la Constitución, que comprende la instalación y la explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación.

El nuevo texto deroga la Ley 9/2014, de 9 de mayo, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima. La entrada en vigor de la nueva **LGT** se ha producido el 30 de junio de 2022.

II

Tal y como queda expuesto, en el documento sometido a informe la operadora consultante hace especial hincapié en las medidas que pretende adoptar en el supuesto de incumplimiento, o uso ilícito o indebido del servicio por parte del cliente, con especial mención de **su exoneración** de responsabilidad en caso de concurrir alguno de los supuestos que detalladamente se describen, y que podrían dar lugar a la interrupción definitiva del servicio.

Pues bien, en relación con dicho particular, conviene referir que el deber de actuación con la máxima diligencia (i) para evitar los riesgos que pueda conllevar la utilización del servicio de cuya comercialización se trata, (ii) su mantenimiento en las condiciones jurídicas y técnicas que resulten de aplicación —adoptando las medidas necesarias en orden a la diligencia, precaución, vigilancia, supervisión y control de dicho servicio—, y (iii) el control del cumplimiento por lo dispuesto en la normativa de protección de datos mediante la previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan, **se encuentran** claramente vinculados al ámbito del responsable del tratamiento con el principio de protección de datos relativo a la “**proactividad**”, exigible a dicho responsable. Así, en el apartado 1 del artículo 5 del RGPD, se enumeran los principios que deben regir cualquier forma de tratamiento por parte del responsable, para —en su apartado 2— establecer que “*El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).*”, a saber:

“Artículo 5 Principios relativos al tratamiento

1. Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»); c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»); f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo (**«responsabilidad proactiva»**).” La negrita es nuestra.

De lo anterior se obtiene que —existiendo un *deber de diligencia ineludible*, referido a la operadora consultante, en orden al debido cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto y legal funcionamiento del servicio propuesto—, **corresponde a dicha consultante, responsable de los tratamientos de datos que se pretenden realizar**, velar por el completo cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos atinentes a la privacidad y a la protección de los datos de carácter personal de los afectados.

Así, la operadora deberá velar por **el cumplimiento de todas y cada una** de las obligaciones que le incumben como responsable del tratamiento de los datos, no sólo cumpliendo, sino también *siendo capaz de demostrar* (responsabilidad proactiva) el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 del RGPD.

En consecuencia, las previsiones contenidas en los apartados (i) “Secreto de las comunicaciones e integridad y seguridad de las redes, servicios y contenidos”, que posibilitan la limitación o detención de la prestación del servicio en los casos que se exponen, (ii) “Interrupción definitiva del servicio”, en los supuestos de grave incumplimiento de sus obligaciones por parte del cliente, o por el uso ilícito o indebido del servicio, (iii) y la enumeración —a través de *numerus clausus*— de los supuestos típicos considerados como usos contrarios al buen uso o “uso no autorizado” y/o fraudulento, no son óbice para el debido cumplimiento por la consultante de los principios de protección de datos del artículo 5 del RGPD, especialmente en el marco de su responsabilidad activa.

III

En segundo lugar, el presente informe se referirá al análisis de conformidad del propio servicio de cuya comercialización se trata con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, que podrá ofrecerse en el marco de actuación de la operadora consultante, o bien por cualquiera de las empresas de su Grupo.

A través del servicio M2M de comunicaciones móviles, se pretende la realización de tratamientos de datos tanto de “máquina a máquina” (e iniciados de forma automática), como mediante intervención humana. La implantación de este se realizará para diversas finalidades, tales como las de telemando, telemedida, telecontrol, alarmas u otros de naturaleza similar. En la consulta se ofrecen algunos ejemplos, así, la localización GPS de vehículos, flotas, etc.; la utilización de líneas de emergencia en ascensores; la instalación de cámaras de videovigilancia; los sistemas de alertas en máquinas vending; los sistemas de alarma; los localizadores de personas; o el servicio e—Call en automóviles.

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** —“Licitud del tratamiento”—, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado **dio su consentimiento** para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; (la negrita es nuestra)

b) **el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato** en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de

medidas precontractuales; (la negrita es nuestra)

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de **intereses legítimos** perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. (la negrita es nuestra)

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

De acuerdo con lo anterior, procede enmarcar el tratamiento de los datos personales de los afectados dentro de las previsiones del referido precepto, teniendo en cuenta, de una parte, (i) la normativa aplicable en materia de protección de datos, cuyas bases fundamentales quedan transcritas más arriba, de otra parte, (ii) la normativa conexas —igualmente aplicable— en relación con determinadas cuestiones que requieren su consideración y el correspondiente análisis de cumplimiento normativo (LGT y Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico —LSSI—), en tercer lugar, (iii) el examen de las cláusulas específicas del servicio, contenidas en el apartado “Protección de datos” del documento sometido a informe, y, finalmente, (iv) las previsiones de la operadora consultante en materia de privacidad y protección de datos, incorporadas —con carácter general— al sitio web que señala en su consulta.

Del análisis de legalidad propuesto —que exige el examen de las normas y cláusulas que se citan—, resultan diferentes cuestiones que —en aras de su mejor comprensión— invitan a su consideración conjunta, dando así cumplida respuesta a los diversos puntos sobre los que incidirá el presente informe.

Ab initio, debemos señalar que la política de privacidad de la operadora consultante —cuya consulta se puede realizar en el enlace que indica en su escrito—, ha sido objeto de **reiterados informes emitidos** por esta Agencia,

en los que se concluye acerca de su grado de adecuación a la normativa de protección de datos, y señalándose —en cada caso— la modificación de determinados puntos, o la determinación de su plena adecuación legal. En el momento actual, *la versión web de la política de privacidad* de la operadora consultante se contiene en el documento que se obtiene en Internet, y que data de *julio de 2020*.

En cada caso, los citados informes —**por todos, el informe 100/2020**, de 8 de febrero de 2021—, analizan las cláusulas presentadas a consulta, observándose que en todas ellas se proporciona información básica de *primer nivel* —respondiendo al esquema de información por capas—, que puede ser ampliada a través de la consulta de la página web, mediante el enlace al que se remiten (información de *segundo nivel*).

Dicho enlace coincide con el señalado en la presente consulta, accediéndose a este a través del sitio web de la operadora consultante. **En consecuencia**, sin perjuicio de las observaciones a las que se hará concreta mención en este informe, **se dan aquí por reproducidas todas las consideraciones realizadas en los anteriores, relativas al contenido íntegro de la política de privacidad y protección de datos de la operadora, por todos, el informe 100/2020**, de 8 de febrero de 2021 (segundo nivel informativo), que se obtiene en el apartado general obrante en www.movistar.es/privacidad (versión julio 2020).

IV

Procede, por tanto, entrar en el examen de adecuación de la **cláusula específica del servicio de comunicaciones M2M**, recogida en el apartado “Protección de datos” del documento que se informa, haciéndolo tanto a la luz de la normativa de protección de datos, como en atención a lo dispuesto en la normativa conexas aplicable, principalmente en *materia de telecomunicaciones y de comercio electrónico*, realizando un análisis de legalidad coherente acudiendo, asimismo, cuando sea necesario, al contenido informativo de *segundo nivel* que se obtiene en el enlace general sobre privacidad de la operadora.

A la vista de la citada cláusula, la primera cuestión que se plantea es la referente a la **corresponsabilidad** de los tratamientos de datos realizados. Según señala el documento que se informa, “*acorde con la normativa europea de protección de datos de carácter personal y en virtud de lo establecido en dicha Política, las siguientes empresas del Grupo (...) son corresponsables del tratamiento de los datos personales del Cliente (...) en función de los productos y servicios que tenga contratados: (...) y (...).*”

Pues bien, en relación con **la identidad del responsable del tratamiento** debe señalarse que, según prevé el Considerando 79 del RGPD:

“(…) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable....)” (El subrayado es nuestro)

Se recoge así la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la *primera capa informativa* se limita a enunciar la existencia de la citada corresponsabilidad de los tratamientos, debiendo acudir a la *segunda capa informativa*, obrante en el sitio web de la operadora, **Apartado 2 ¿Quién trata tus datos?**, para obtener información complementaria al respecto.

En dicho apartado, se indica lo siguiente:

“Las siguientes empresas del Grupo (...), independientemente de la marca (...) con la que el Cliente o usuario disponga del servicio, serán corresponsables del tratamiento de los datos personales del Cliente (...) en función de los productos y servicios que tenga contratados, salvo aquellas particularidades que se pudieran recoger en las condiciones del producto o servicio concreto (en adelante conjuntamente ...):

- *(Empresa 1), con CIF XXXXXXXX y domicilio social en XXXX, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (.....)*
- *(Empresa 2), con CIF XXXXXXXX y domicilio social en XXXX, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (.....)*

Asimismo, te comunicamos que el Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de velar por la protección de tu derecho fundamental a la protección de datos personales dentro de (...). Para contactar con el Delegado de Protección de Datos de (...), podrás escribir a la siguiente dirección: [DPO \(...@....com\)](mailto:DPO (...@....com)) “

Como se viene exponiendo, se hace referencia a la figura del **corresponsable del tratamiento**, por lo que debe acudir a lo dispuesto en el artículo 26 del RGPD, del siguiente tenor:

“1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades

respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 13 y 14, salvo, y en la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados. (El subrayado es nuestro)

2. El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo. (El subrayado es nuestro)

3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.”

Por su parte, la LOPDGDD en el artículo 29, bajo la rúbrica “*Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento*” establece lo siguiente:

“La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.”

Asimismo, el Considerando 60 pone en valor la necesidad de adaptación de la información al contexto específico en el que se traten los datos, al indicar que:

“(…) El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales.(…)” (El subrayado es nuestro)

En consecuencia, en la cláusula objeto de análisis *no puede considerarse que se informe* a los afectados de los aspectos esenciales del *acuerdo de corresponsabilidad*. Asimismo, el destinatario de la información *tampoco puede conocer* qué entidad de entre las indicadas participará en los tratamientos de datos, sobre qué datos personales se realizarán éstos, y/o con qué intensidad o para qué finalidad tratarán sus datos los diferentes corresponsables, pues el uso de la expresión “*en función de los productos y servicios que tenga contratados, salvo aquellas particularidades que se*

podieran recoger en las condiciones del producto o servicio concreto”, resulta insuficiente a los pretendidos efectos.

De la lectura de esta cláusula, se infiere que, si el afectado ha contratado los productos y servicios con una de las empresas, no se explica en qué medida alguna de las otras tendrá responsabilidad en el tratamiento de los datos. Es decir, si una de ellas es la responsable —condición derivada de la prestación del servicio—, no se resuelven las cuestiones relativas a qué condición tendrá la otra, ni respecto de qué datos realizará tratamientos, no explicitándose —tampoco— con base en qué finalidad, cómo, ni para qué podrán tratar las otras empresas del Grupo los datos personales de los afectados.

Por lo tanto, sería acorde con el principio de transparencia, en general, y con los preceptos transcritos, en particular, que se incluyera en la leyenda informativa un punto de acceso a los aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad. Dicha previsión podría realizarse bien a través de un enlace a un sitio web establecido al efecto, bien indicándolo en la política de privacidad del sitio web, o bien de cualquier modo que garantizase la inmediatez y plena disponibilidad de esa información para los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

A su vez, para que la información contuviese al menos una atribución, aunque fuese genérica o por categorías, debería indicarse qué servicios y/o productos presta cada entidad para que, en función de estos, el destinatario conociera cuál de ellas es la responsable del tratamiento de los datos que se derivase de la contratación y uso del producto o servicio en cuestión.

Finalmente, en relación con los **datos de contacto del delegado de protección de datos**, se incluye una dirección de correo electrónico establecida al efecto, lo que resulta conforme con la normativa aplicable.

Siguiendo con la información ofrecida en su *primer nivel informativo*, la cláusula sobre “Protección de datos” del servicio de comunicaciones “M2M, señala que la operadora tratará *“los datos del cliente **para la prestación del Servicio**, así como para otras finalidades que, como cliente (...), **nos permita o autorice en los términos recogidos en la Política de Privacidad**, en la que además se recoge toda la información necesaria para que el cliente pueda decidir sobre otros tratamientos que requieran **su consentimiento**”. (...) “Los **datos personales necesarios para la ejecución del contrato** que el cliente **aporta en este acto**, junto a los obtenidos con motivo de la **prestación del Servicio**, así como a través de los canales de atención y comercialización, serán incluidos en ficheros informatizados de datos de carácter personal titularidad de (...).” (...) “Adicionalmente a los tratamientos recogidos en la Política de Privacidad, al aceptar los presentes términos y condiciones de uso*

del Servicio, el Cliente es informado del **tratamiento específico de los datos descritos en las condiciones de prestación de los servicios que implica la contratación de conectividad M2M**, en concreto, los datos obtenidos del Cliente o usuario, los datos derivados de la prestación del servicio o producto, los datos de Productos o Servicios (...), **los datos de tráfico, los datos de localización, los datos emitidos y/u obtenidos del dispositivo, así como incluyendo, en todo caso, los datos generados o estimados por (...) cuyo tratamiento es necesario** para todas las finalidades indicadas en la Política de privacidad en ejecución del contrato, para la prestación del Servicio.” (La negrita es nuestra)

Así, según se observa, la redacción de esta primera capa informativa **resulta confusa** en alguno de sus aspectos, determinando —por remisión a la política de privacidad general de la compañía, obrante en su sitio web—, la existencia de diferentes bases de legitimación de los tratamientos de datos que pretende realizar a consecuencia de la contratación del servicio. De tal suerte, se combinan de *manera imprecisa* dos formas de licitud de los tratamientos de datos, como son las previstas en **las letras a) y b) del artículo 6.1 del RGPD**. Esto es, de la lectura de la cláusula presentada por la operadora, se desprende que se *mezclan* distintas bases jurídicas que legitiman el tratamiento, por un lado, la referida al consentimiento, por remisión al contenido de la política de privacidad del sitio web, y por otro la referida a la ejecución de un contrato, con la concreta especificación de algunos tratamientos de datos que se vinculan directamente a la contratación del servicio.

Todo ello puede provocar que el destinatario de la información no sepa con claridad si debe autorizar el tratamiento, si con la contratación ha autorizado los tratamientos no necesarios, o si, por el contrario, no debe hacer nada, pues el tratamiento de los datos es necesario para la ejecución del contrato/servicio.

Por eso y para que se cumpla el principio de transparencia, que implica el uso de información concisa, transparente, inteligible, y con un lenguaje, claro y sencillo, debe modificarse el texto presentado a informe, de modo que se atribuya con claridad para distintas finalidades una base jurídica concreta, o por el contrario se modifique la siguiente previsión si se entiende que los datos que se citan en la cláusula son necesarios para la ejecución del contrato: “los datos del cliente **para la prestación del Servicio**, así como para otras finalidades que, como cliente (...), **nos permita o autorice en los términos recogidos en la Política de Privacidad**, en la que además se recoge toda la información necesaria para que el cliente pueda decidir sobre otros tratamientos que requieran **su consentimiento**”.

En resumen, conviene precisar que **cuando el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato, no es necesaria la autorización o consentimiento del titular de los datos**.

En cuanto a la **segunda capa informativa**, se explican las finalidades del tratamiento a partir de la identificación de las bases jurídicas que lo legitiman. Se especifican aquellos tratamientos basados en 1. Ejecución del contrato (con 11 subapartados), 2. Interés legítimo (con 4 subapartados, referidos entre otros aspectos a la realización de acciones de mercadotecnia) y 3. El consentimiento (con 5 subapartados, referidos, entre otros aspectos a la realización de acciones de mercadotecnia y a otros derechos derivados de la normativa sobre telecomunicaciones).

V

Continúa la cláusula objeto de informe, señalando lo siguiente:

“Tratar dichos datos del cliente nos permite ser más eficientes y nos ayuda a seguir manteniendo los máximos niveles de seguridad y confianza en los servicios que te prestamos. Para ello se informa igualmente al cliente o usuario del que podremos tratar los datos obtenidos del cliente o usuario los datos, los datos derivados de la prestación del servicio o producto, los datos de Productos o Servicios (...), los datos de consumos en (...), los datos de tráfico, los datos de visitas web, los datos de localización, los datos emitidos y/o obtenidos del dispositivo, así como los datos generados o estimados por (...) para las siguientes finalidades legítimas relacionadas con sus preferencias e intereses, que te permitirán:

*- Recibir por cualquier medio, información de ciberseguridad **sobre tráfico anómalo** que se puedan estar realizando desde su conexión y que afecten a la seguridad de las redes, sistemas o equipos. (la negrita es nuestra)*

*- Disfrutar y recibir **ofertas personalizadas** de productos y servicios (...) por cualquier medio, **independientemente de la empresa del Grupo** (...) que lo preste (puede consultar un listado actualizado de las empresas del Grupo (...) que prestan productos y servicios (...) también en el apartado de Privacidad de nuestra web y, en concreto, en [www\(...\)/privacidad](#)). (la negrita es nuestra)*

*- **Personalizar ofertas de productos y servicios** (...), con independencia de la **empresa del Grupo** (...) que lo preste, cediéndonos los mencionados datos si fuera necesario y de forma puntual, para facilitar la gestión administrativa interna y gestión comercial de **dichos productos y servicios**. (la negrita es nuestra)*

*- En caso de que le sea aplicable, recibir en su servicio (...) (televisión y otros dispositivos) ofertas personalizadas de productos y servicios (...) **o de otros proveedores**.” (la negrita es nuestra)*

Tal y como se observa, el texto transcrito —que se incorpora a la cláusula objeto de informe, formando también parte de la primera capa informativa—, **resulta también confuso** en alguno de sus aspectos, toda vez que en él se mezclan diversas bases jurídicas que habilitan, en su caso, el tratamiento de datos de carácter personal. Esto es, el texto reproducido más arriba se estructura a partir de las diferentes finalidades y servicios que pretenden prestarse como consecuencia de la contratación, sin mención expresa de la base de legitimación del tratamiento, y sin que se determine con

la claridad necesaria si las referidas finalidades se fundamentan en la ejecución del contrato, o bien en el interés legítimo de la operadora.

De tal modo, junto con los tratamientos de datos derivados inequívocamente de la **relación contractual** de la consultante con los clientes del nuevo servicio —*ex artículo 6.1. b) RGPD*—, se mencionan otros que, sin lugar a duda, se basarían en el interés legítimo de la operadora —*ex artículo 6.1. f) RGPD*—. En consecuencia, determinadas finalidades —derivadas de la contratación del servicio M2M— figuran en la política de privacidad de su sitio web, como dimanantes del **interés legítimo** —Apartado 2º del enlace sobre privacidad—, siendo de similar tenor y alcance.

A saber:

“2º. Interés legítimo

El interés legítimo constituye una base legitimadora del tratamiento, siempre que dicho interés en tratar los datos del cliente (...) para la finalidad indicada se encuentre dentro de tus expectativas razonables basadas en la relación que tienes como cliente y usuario (...).

En este sentido, consideramos que se encuentran amparados por el interés legítimo y, por tanto, (...) podrá tratar los siguientes datos para cada una de las finalidades descritas a continuación:

*a. Se podrán tratar los datos sobre **tráficos anómalos** que se puedan estar realizando desde la conexión del cliente o usuario y que afecten a la seguridad de las redes, sistemas o equipos con el fin de que (...) pueda remitir al mismo, por cualquier medio, información o alerta de ciberseguridad. (la negrita es nuestra)*

a

*b. Se podrán tratar los datos obtenidos del Cliente o usuario, **los datos derivados de la prestación del servicio o producto (datos de los productos o servicios (...), los consumos de (...) (televisión y de otros dispositivos) y las visitas en nuestras páginas web y Apps ...)** así como los datos generados por (...), con el fin de **analizar o predecir de forma muy básica aspectos relativos a sus preferencias personales e intereses** y que (...) pueda ofrecer al mismo, por cualquier Medio, **ofertas personalizadas** de Productos y Servicios (...). (la negrita es nuestra)*

0

*c. Se podrán ceder **a otras empresas del Grupo (...)** que presten Productos y Servicios (...), los datos obtenidos del Cliente o usuario, los datos derivados de la prestación del servicio o producto (datos de los productos o servicios (...)) y los consumos de (...) (televisión y de otros dispositivos) y los datos generados por (...) con fines administrativos internos o de gestión comercial, para que (...) pueda ofrecer al mismo, por cualquier medio, **ofertas personalizadas de dichos Productos y Servicios (...)**, siempre que fuera necesario y de forma puntual, así como para poder evitar la reiteración innecesaria de comunicaciones comerciales. (la negrita es nuestra)*

b

*d. En el caso de tener contratado el Servicio (...) (televisión y otros dispositivos), se podrán tratar los datos obtenidos del Cliente o usuario, los datos derivados de la prestación del servicio o producto (datos de los Productos o Servicios (...), los consumos de (...) (televisión y de otros dispositivos) y las visitas en nuestras páginas web y Apps ...) y los datos generados por (...), **con el fin de analizar o predecir de forma muy básica aspectos relativos a sus preferencias personales e intereses** y*

que, (...) pueda ofrecer al cliente ofertas personalizadas de productos y servicios (...) en tu servicio de televisión, así como productos y servicios de socios (...). (la negrita es nuestra)

Adicionalmente y para la realización de ofertas comerciales, (...) podrá tratar los datos proporcionados por el usuario de aquéllos que hayan solicitado información sobre Productos y Servicios (...) por cualquier medio (incluyendo, en su caso, los electrónicos), durante un plazo máximo de dos años desde que fueron suministrados.

El derecho de oposición a estos tratamientos podrá realizarse mediante el envío de la notificación pertinente a las direcciones que constan en el apartado “Ejercicio de Derechos” de la presente Política de Privacidad.”

En resumen, la cláusula sobre *interés legítimo de la política de privacidad general* de la operadora, obrante en su sitio web, engloba como dimanantes de dicho interés, los tratamientos de datos referidos a (i) tráfico anómalo, (ii) los relativos a datos derivados de la prestación del servicio o producto, que permitan el análisis y predicción de aspectos relativos a las preferencias personales e intereses de los afectados, y que permitan ofrecerle, por cualquier medio, ofertas personalizadas de productos y servicios, (iii) la cesión de determinados datos personales a otras empresas del grupo a fin de promover ofertas personalizadas de dichos productos y servicios de estas, y (iv) el tratamiento de datos derivados de la prestación de otros servicios con el fin de analizar o predecir de forma muy básica aspectos relativos a sus preferencias personales e intereses de los afectados.

Por eso —también en este punto— para que se cumpla con el principio de transparencia, que implica el uso de información concisa, transparente, inteligible, y con un lenguaje, claro y sencillo, debe modificarse el texto presentado a informe, de modo que se atribuya con claridad para las distintas finalidades propuestas **una base jurídica concreta**, actualizando las previsiones que se citan en la cláusula presentada a informe en consonancia con las disposiciones sobre privacidad obrantes, con carácter general, en el sitio web de la consultante.

Así, *de una parte*, tanto el tratamiento de los datos de carácter personal con la finalidad de **obtener perfiles** acerca del comportamiento, preferencias personales y/o intereses de los clientes de la operadora —recogidos en *la letra b)* del apartado sobre interés legítimo de la política de privacidad de la compañía—, como, *de otra parte*, aquellos otros tratamientos dirigidos al **análisis y predicción** de aspectos relativos a preferencias personales e intereses —englobados en *la letra d)* del mismo apartado— podrían requerir, con carácter general del *previo consentimiento de los afectados* —ex artículo 6.1.a) RGPD—.

A este respecto, conviene recordar que, **según define** el RGPD en su artículo 4.4), por “*elaboración de perfiles*” se entiende toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos

personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física; **recogiendo** su artículo 22.1 —Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles— el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, *salvo en los casos* que se enumeran en su apartado 2.

Por otra parte, el *apartado c)* de la cláusula sobre “interés legítimo” recoge, asimismo, el tratamiento de datos para dos finalidades diferentes, que deberían regularse de manera separada, y que requerirían también del consentimiento del afectado. Así, tanto la cesión a otras empresas del Grupo, como la oferta personalizada de productos y servicios por parte de estas a los interesados, deberían ir precedidas de la obtención del correspondiente consentimiento de los clientes de la consultante.

VI

De la lectura de la cláusula presentada a informe, se infiere que se pretende elaborar perfiles de los usuarios para acciones de mercadotecnia, informándose sobre la realización de dichas acciones a *través de cualquier medio*, y deduciéndose, por tanto, **que se incluyen los medios electrónicos**.

Sobre la adopción de **decisiones automatizadas**, tal y como ocurre en los supuestos de comunicaciones máquina a máquina —iniciados de manera automática—, y la realización de **perfiles**, en el artículo 13.2 f) RGPD se prevé la necesidad de informar en los siguientes términos:

“(…) f) la existencia de **decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles**, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.” (la negrita es nuestra)

Por su parte, el artículo 21 del RGPD señala lo siguiente:

“1. El interesado tendrá **derecho a oponerse en cualquier momento**, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la **elaboración de perfiles** sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que

prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. (la negrita es nuestra)

2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, **el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.** (la negrita es nuestra)

3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.”

De acuerdo con lo expuesto, en la cláusula analizada se observa que se informa de este tipo de tratamientos –que deben entenderse basados en el interés legítimo para acciones de mercadotecnia– y, en la segunda capa informativa obrante en el apartado sobre interés legítimo del sitio web de la política de privacidad de la consultante, se ofrece la posibilidad de ejercicio del derecho de oposición, al señalarse que:

“El derecho de oposición a estos tratamientos podrá realizarse mediante el envío de la notificación pertinente a las direcciones que constan en el apartado *Ejercicio de Derechos* de la presente Política de Privacidad.”

Ahora bien, respecto de la aplicación de la base jurídica prevista en el artículo 6.1 f) del RGPD –la concurrencia de un interés legítimo– para la realización de acciones de mercadotecnia a través de medios electrónicos, debe señalarse que, cuando se trate de comunicaciones electrónicas, el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico —norma especial cuya aplicación prevalece sobre el Reglamento—, exige *el consentimiento expreso del interesado, salvo que se trate de productos y servicios similares a los ya contratados por el usuario.*

A dichos efectos, en el Informe 195/2017 de este Gabinete jurídico, se indicaba que *“La Ley 34/2002 constituye norma especial en relación con estas actividades, por lo que no podría acudir para resolver la cuestión planteada en este punto a las previsiones del reglamento general de protección de datos, sino que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en esta norma especial cuando las comunicaciones se lleven a cabo a través de medios electrónicos”.* En consecuencia, se excluye el interés legítimo para este tipo de envíos.

Respecto de otros canales de comunicación, esta Agencia ha venido entendiendo que, por analogía, resulta posible efectuar publicidad sobre *productos o servicios similares* a los contratados, pudiendo existir un *interés legítimo* siempre y cuando se haga una interpretación razonable de lo que debe

ser un producto o servicio similar al previamente contratado, no extendiéndose a aquéllos respecto de los que no pueda aplicarse una identificación lógica basada en la expectativa razonable del cliente (Informe 195/2017). En consecuencia —dentro de los límites expuestos—, estos tratamientos se fundamentarían en lo dispuesto en el artículo 6.1 f) del RGPD.

Por lo tanto, en relación con el artículo 13.2, apartados c) y f) del RGPD, debe indicarse que se identifican los fines del tratamiento y la base jurídica que legitima su uso, **todo ello sin perjuicio de la modificación** que como se ha apuntado resulta necesaria para adecuar la cláusula específica que se informa, obrante en la primera capa informativa, a las previsiones de la base jurídica del artículo 6.1 f) RGPD para acciones de mercadotecnia por medios electrónicos, en los términos de la segunda capa informativa del apartado sobre privacidad del sitio web de la consultante.

En lo que respecta a la finalidad consistente en tratar **datos de localización** que se generen a través del uso de las comunicaciones móviles M2M (a título de ejemplo, localización GPS de vehículos, localizadores de personas, etc.), debe señalarse que el artículo **66.2 c)** de la nueva **Ley 11/2022**, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, norma especial cuya aplicación prevalece sobre el Reglamento, dispone que:

*“Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados.
(...)”*

2. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los datos de tráfico y los datos de localización distintos de los datos de tráfico, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:
(...)

c) a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localización distintos de tráfico.

Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones de emergencia efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.”

Asimismo, de acuerdo con el apartado 5 del propio artículo 66 de la nueva LGT:

“5. Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, y, en particular, **de la aplicación del concepto de consentimiento que figura en la misma.**” (la negrita es nuestra)

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del RGPD, la base legal que permite dicho tratamiento es el consentimiento expreso de los usuarios afectados, manifestado de manera específica.

Pues bien, según se observa, dentro del apartado número 5, apartado 3º -Consentimiento- de la Política de Privacidad de la operadora, contenido en su sitio web, se señala expresamente al *consentimiento como fuente legitimadora de los tratamientos* de datos de que se trata.

A saber:

“El consentimiento constituye una base legitimadora del tratamiento que permitirá que *(la operadora)* pueda tratar los siguientes datos para cada una de las finalidades descritas a continuación, previa obtención de la correspondiente autorización del cliente o usuario según corresponda.

Para ello, cada Cliente o usuario recibirá previamente una comunicación informativa específica con el suficiente nivel de detalle para el tratamiento de los datos con las finalidades indicadas a continuación:
(...)

b. Se podrán tratar los datos obtenidos del Cliente o usuario, los datos derivados de la prestación del servicio o producto (...) (datos de tráfico, visitas web **y localización**) y fuentes externas, con el fin de realizar un **perfil comercial** y poder realizar al mismo, por cualquier medio, incluidos electrónicos y digitales, ofertas personalizadas de Productos y Servicios (...).

c. Se podrán tratar los datos obtenidos del Cliente o usuario, los datos derivados de la prestación del servicio o producto (...) (datos de tráfico, visitas web **y localización**) y fuentes externas con el fin de realizar un perfil comercial y poder realizar el mismo por cualquier medio, incluidos electrónicos y digitales, ofertas personalizadas de productos y servicios de socios *(de la operadora)*.”

a

Por otra parte, en el supuesto sometido a informe —desde la perspectiva de protección de datos— la funcionalidad consistente en la implantación de *líneas de emergencia y sistemas de alarmas* obtiene su base jurídica legitimadora en el apartado **b) del artículo 6.1** del RGPD, al tratarse los datos de carácter personal de las personas afectadas para el desarrollo y ejecución de los servicios prestados en el marco de la relación contractual.

En su *segunda capa*, las referencias a la legitimación basada en la “*Ejecución del contrato*” se contienen en el número 5, apartado 1º, letra a) de la Política de Privacidad de la consultante, incluida en su sitio web. De tal modo, la prestación de este tipo de servicios, así como su mantenimiento y gestión, derivan de la relación contractual mantenida entre la operadora y sus clientes, constituyéndose como un servicio específico inherente al objeto del contrato.

VII

En cuanto al envío y recepción de **promociones** remitidas por **empresas terceras** colaboradoras, y la personalización de sus ofertas, en la cláusula sometida a informe, se señala que dichas ofertas personalizadas de productos y servicios de **otros proveedores** podrán producirse “*en caso de que le sea aplicable (al cliente)*”.

Pues bien, conviene señalar que dicha práctica, únicamente podrá basarse en el *consentimiento expreso* de las personas afectadas, debiendo informarse específicamente a los interesados sobre la posibilidad de revocar posteriormente dicho consentimiento, u oponerse al tratamiento dimanante del mismo, si bien, nada obsta a que dicho consentimiento se otorgue mediante la aceptación de las finalidades que, a dichos efectos, pudieran plasmarse —y *consentirse por los afectados*— en la política de privacidad aplicable con carácter general.

De acuerdo con lo anterior, en relación con dicha exigencia —derivada de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del RGPD—, **convendría** incorporar la correspondiente previsión en el **clausulado específico** sometido a informe, garantizando que el tratamiento de los datos de carácter personal de los afectados para dichos fines resulta *expresamente consentido*, en los términos de los artículos 4.1 (11) y 7 del RGPD, sustituyendo así la expresión que en la actualidad se contiene en dicha cláusula, cuando *señala “en caso de que le sea aplicable”*, por una mención concreta también en la *primera capa informativa*.

El siguiente párrafo de la cláusula informada, alude (i) al posible **encargo del tratamiento a proveedores** de la confianza de la consultante en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con las finalidades de su Política de Privacidad, dicho acceso a datos por cuenta de terceros resulte necesario, (ii) y a la realización de transferencias internacionales de datos en el ejercicio de las funciones (de la operadora) en el sentido dispuesto en la política de privacidad de su sitio web:

“Por otro lado, para cualquiera de las finalidades previstas en la Política de Privacidad, (...) podrá encargar su tratamiento a proveedores de confianza. La relación actualizada de las categorías de dichos proveedores, así como de aquellos que realizan transferencias internacionales de datos en el ejercicio de sus funciones se recoge en [www\(...\).es/privacidad/info-adicional](http://www(...).es/privacidad/info-adicional).

En razón de dichas finalidades, desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal, las empresas terceras **-proveedores-** que aparecen relacionadas en la política de privacidad disponible en su sitio web — en un tercer nivel, www.xxxx.es/privacidad/info-adicional— actuarán como **encargadas del tratamiento**, en el sentido recogido en los **artículos 4.8 y 28.3 del RGPD**, y **artículo 33 de la LOPDGDD**. Asimismo, en el párrafo informado se alude a la posibilidad de realizar **transferencias internacionales** de datos en los términos también contenidos en la política de privacidad que obra en la página web de la operadora consultante, sometidas al régimen establecido en el Título VI, **artículos 40 a 43 de la LOPDGDD**.

A este respecto, según se observa, las previsiones contenidas en los apartados número 8 *-Información que compartimos-* y 9 *-Transferencias Internacionales de Datos-* de dicha política, resultan conformes con lo dispuesto en los citados preceptos.

“8. Información que compartimos: destinatarios o categorías destinatarios
(...)”

a. Necesarias para la prestación del servicio:

(...) tiene contratados para la gestión de algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio, proveedores de confianza que podrán tener acceso a datos personales, que actuarán como encargados de tratamiento y que estarán obligados contractualmente a cumplir con sus obligaciones legales de encargado de tratamiento, a mantener la confidencialidad y secreto de la información.
(...)”

“9. Transferencias internacionales de datos:

Se informa que (...) contrata la gestión de algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio con encargados de tratamiento situados fuera del Espacio

Económico Europeo y que, en todo caso, garantizan un nivel adecuado de protección de los datos personales.

El listado detallado de las mismas podrá ser consultado en el siguiente enlace (...)”

Finalmente, en lo relativo al ejercicio de sus derechos por parte de las personas afectadas por los tratamientos, se informa favorablemente el apartado final de la cláusula sometida a informe, al aludir claramente a la existencia de los medios e instrumentos establecidos legalmente en orden a la mejor defensa de los derechos de los clientes relativos a su privacidad y a la protección de sus datos de carácter personal.

De acuerdo con el análisis que nos ocupa, la referida cláusula cumple tanto con lo dispuesto en los artículos **15 a 22 del RGPD**, como en el artículo **11** de la **LOPDGDD**.